

de generar confusión lograron que este respaldo inicial decayera, aunque en la fecha de entrega del *Informe final* el apoyo ciudadano superaba el 50%.

Las movilizaciones independientes que se han producido durante los dos años transcurridos a partir de la presentación de este documento han sido numerosas. Desde la organización del colectivo Para Que No Se Repita, pasando por las acciones de estudiantes universitarios que voluntariamente difunden y sensibilizan en estos temas a la población de colegios y barrios de Lima —como por ejemplo Sembrando Memoria—, hasta la importante movilización de los chasquis de Paz y Solidaridad, quienes durante todo este año están atravesando a pie el país buscando que el país adquiera conciencia en torno a los temas planteados por el *Informe final*.

Hay que señalar, sin embargo, que frente a las manifestaciones de solidaridad y la búsqueda de soluciones se erige la inmensa indiferencia de muchos peruanos. Algunos consideran que este es un asunto del pasado, que debe cerrarse de una vez y que es mejor olvidar. Otros se escudan en estas posiciones para permanecer en el silencio esperando que el tiempo borre de la memoria sus crímenes. Al respecto, cabe recordar que la conciencia de tener y asumir derechos es directamente proporcional a la manera en que se los defiende. Cuando una sociedad no considera necesario defender los derechos humanos, es porque en general sus miembros no los practican.

Concluimos afirmando que el tema que planteó la CVR es de primer orden y, probablemente, debería ser el ho-

rizonte que guíe la política cotidiana, la gobernabilidad y asuntos como los del TLC, la interoceánica, la descentralización y la lucha contra la corrupción. Abordar estos aspectos y muchos otros sin la profundidad suficiente —vale decir, sin entroncarlos con una perspectiva de construcción nacional— equivale a edificar una casa sobre la arena. ¿Sobre qué base construimos el Perú moderno? Un cimiento seguro y parejo es el respeto por la dignidad humana y el reconocimiento de que el principal valor es la persona. Construir una casa sobre un terreno desigual y asimétrico, en el que no se respete a las personas, solo nos conducirá a crisis permanentes, a conflictos sociales cada vez más agudos, al derrumbe de las políticas sociales y, como siempre, a la sensación de que, en el Perú, las cosas no cambian. En realidad, no cambian precisamente porque no se transforma la exclusión en inclusión ni la desigualdad en igualdad.

La CVR ha colocado la varilla de la construcción social y política en la igualdad, en la simetría, en la constitución de ciudadanía, en la tolerancia, en el respeto por la dignidad humana y en la democracia. La ciudadanía aparece, principalmente, como la capacidad para luchar por los derechos. La persona que no lo hace no es, en sentido estricto, un ciudadano. Por ello, la construcción de los derechos en el Perú equivale a la construcción de la ciudadanía. Un país sin ciudadanos es un mundo que vive sin derechos. En ese mundo, la democracia no puede florecer porque esta se apoya y constituye sobre la base de ciudadanos. Sin ciudadanos no hay democracia. Este es un tema de coyuntura permanente y que aflora a cada instante, aunque algunos no lo quieran reconocer. ■

LAS RELACIONES HEMISFÉRICAS EN LA ENCRUCIJADA

Farid Kahhat

Profesor del Departamento de Ciencias Sociales PUCP

¿Recuerda los ominosos presagios sobre las consecuencias que tendría para México y Chile negarse a respaldar a Estados Unidos en la guerra contra Iraq? ¿Y los halagüeños augurios sobre los beneficios que obtendrían países como Colombia por apoyar a los norteamericanos en ese conflicto? Entonces recordará también que ni los castigos ni las recompensas pronosticadas ocurrieron. Salvo por el hecho de que la Casa Blanca canceló la celebración por el día nacional de México y el bajo perfil

que tuvo la firma del Tratado de Libre Comercio con Chile, no queda claro que ambos países hayan pagado un precio que fuese una consecuencia inequívoca de la posición que adoptaron en forma conjunta en el seno del Consejo de Seguridad.

Por otra parte, Colombia no solo no recibió una compensación por su respaldo —recordemos que el Plan Colombia no guarda relación alguna con la guerra en

Iraq—, sino que incluso fue sancionada por su negativa inicial a firmar un acuerdo bilateral mediante el cual se comprometía a no entregar a ciudadanos estadounidenses ante una eventual requisitoria de la Corte Penal Internacional. Más aún, países como Colombia y el Perú vieron entonces frustradas sus pretensiones de firmar un tratado bilateral de libre comercio con Estados Unidos.

Las previsiones descritas derivan de una comprensión errónea de la naturaleza de las relaciones hemisféricas. Si algo demuestra la historia contemporánea de esas relaciones es que cuando la seguridad se convierte en la prioridad fundamental de la agenda exterior de Estados Unidos, los temas de desarrollo —que constituyen la prioridad fundamental de la agenda hemisférica desde una perspectiva latinoamericana— pasan a segundo plano. Peor aún, desde la óptica que prevalece en Estados Unidos, temas como el narcotráfico —que podría ser abordado como un problema de responsabilidad compartida ante el cual la estrategia común debiera abocarse a promover un desarrollo alternativo— tienden a ser percibidos como problemas de seguridad que cuando parecen tener vínculos con la violencia política —como en el caso colombiano— deben ser abordados mediante la erradicación coercitiva de cultivos y la represión militar.

Las consecuencias de ese enfoque se pueden observar claramente en el caso de Bolivia. Allí, a criterio de Jeffrey Sachs, la erradicación forzada de cocaes sin que medie una política eficaz de promoción de cultivos alternativos o la creación de un fondo de compensación generó el surgimiento de una base social presta a movilizarse en respaldo de líderes como Evo Morales.

Por lo demás, los temas de seguridad que concitan la atención del gobierno de Estados Unidos se concentran esencialmente en el Medio Oriente y el Asia Central. En ese contexto, una actitud complaciente por parte de países que carecen de peso propio en la agenda exterior de Estados Unidos —es decir, casi toda América Latina— es una virtual garantía de ser relegado al ostracismo en el Departamento de Estado. Así, los temas bilaterales pasan a ser administrados por burócratas de

mando medio, que aplican las normas vigentes sin mayor discrecionalidad política. Y los gobernantes de esos países suelen rasgarse las vestiduras cuando sus intereses no son tomados en cuenta o cuando sus Estados son objeto de sanciones. Alegan, entonces, que el trato que reciben es indigno de un aliado leal, cuando es precisamente la lealtad incondicional de países de relevancia menor lo que hace posible darlos por descontados. No en vano todos los presidentes con los que se reunió George Bush durante la última Cumbre de las Américas —es decir, Fox, Kirchner, Lula y Mesa—, gobiernan —o, en el caso de Mesa, gobernaban— países que, en el contexto de una relación esencialmente realista y constructiva, tuvieron hace poco algunos desencuentros con Estados Unidos.

Según todos los indicios, son precisamente esos desencuentros los que explican algunos cambios en la política de Estados Unidos hacia la región, desde el hecho de que adopte una iniciativa unilateral en el tema migratorio hasta la invitación a algunos países andinos para iniciar negociaciones bilaterales con el fin de concretar tratados de libre comercio. No es casual que ello ocurra luego de que el Grupo de los Veintiuno —liderado, entre otros, por Brasil— frustrara los intentos de los países industrializados de incluir en la agenda de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Cancún temas como el de la propiedad intelectual, mientras pretendían posponer para las calendas griegas el asunto de los subsidios agrícolas. Tampoco es casual que esto ocurra poco después de que la reunión ministerial en Miami sobre el tema del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) llegara a su fin sin pena ni gloria.

Los cambios recientes en la política de Estados Unidos hacia la región deben entenderse como un intento de neutralizar algunas iniciativas brasileñas, en particular el intento de liderar un proceso de integración sudamericano que permita negociar en forma conjunta algunos temas de la agenda hemisférica. Salvo quizá por el resguardo de su frontera con México, la política de Estados Unidos hacia América Latina tiene hoy poco que ver con lo que pasa en Iraq. ■